
El nuevo rostro de la conflictividad urbana en el Ecuador

Mario Unda*

Esta reflexión sobre la conflictividad urbana en Ecuador durante el año 2000 se basa en el estudio sobre los conflictos sociales siguiendo, en general, la propuesta hecha por CLACSO para su Observatorio Social de América Latina (OSAL). El OSAL es un programa especial de CLACSO que tiene “como objetivo fundamental aportar elementos para una reflexión crítica, histórico-estructural, sobre las nuevas realidades del capitalismo latinoamericano y, especialmente, sobre las diversas formas que asume el antagonismo social en nuestras sociedades” (2000[b]: 3).

Utilizando como fuente la llamada “prensa nacional”, se ubican los conflictos existentes; se entiende que si un conflicto ha llegado a la opinión pública es porque tiene cierta relevancia. A la noticia se le plantea un conjunto de preguntas que, de manera sintética, permiten ubicar a los actores involucrados (de lado y lado), las demandas, los medios de lucha, (eventualmente) los campos de conflicto y las alianzas, el espacio-tiempo de la conflictividad y las resoluciones. El resultado es una cronología que permite tener un cierto seguimiento de la conflictividad, pero además es un acopio de información que puede ser trabajado en distintas direcciones para profundizar la comprensión de nuestras realidades.

* Sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones Ciudad (Quito, Ecuador). Profesor en la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador y en el Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Ahora bien, para las reflexiones que siguen, hemos enfocado nuestra atención en los conflictos, no en las acciones, en la medida en que nos interesa sobre todo la lógica de la conflictividad y no tanto su cuantificación. Las consecuencias de este recorte son evidentes. Hay conflictos que se desenvuelven en un número amplio de acciones; por el contrario, existen otros conflictos de los que no queda más registro que un puñado de actividades. De la misma manera, hay conflictos que se extenderán en el tiempo por períodos muy prolongados (y aparecerán en la prensa más tiempo), mientras que otros parecerán apenas episodios, sea porque efectivamente se agotan pronto, sea porque pasan por fases alternativas de expresión y de latencia (un ejemplo claro entre nosotros es la privatización de la seguridad social).

Un conflicto, como es obvio, normalmente se desarrolla a través de varias acciones encadenadas. Pero también es necesario tener presente que una acción, individualmente considerada, puede referirse a más de un conflicto. Citemos, verbigracia, las “carpas” o “acampadas” en el parque de El Ejido para protestar contra las privatizaciones y la “ley trole” (el cuerpo legal con el que el gobierno pretende proteger y acelerar la implementación del modelo neoliberal); pero también para protestar por la participación del Ecuador en el Plan Colombia, lo que, dicho sea de paso, sirve para ilustrar cómo se enlazan los conflictos en momentos de saturación de tensiones.

Dicho esto, nunca está de más insistir en que no pretendemos una exactitud estadística. Sabemos que la prensa tiene limitaciones como fuente para el relevamiento de información, y esto es quizás más agudo en cuanto a los conflictos; en parte, porque no todo llega a la “opinión publicada” (y no sólo en mérito a su relevancia social y política); en parte porque, al menos en nuestro caso, los periódicos de circulación nacional no son realmente “nacionales” en el sentido de las problemáticas tratadas; en parte, también, porque la prensa no es solamente un espacio de información y de visibilización, ni simplemente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, sino que se trata de un actor social específico, que se conduce como cualquier otro actor que se precie. En todo caso, el trabajo con la información periodística nos permite acercarnos a la identificación y (acaso) a la comprensión de tendencias, que es lo que a nosotros nos interesa.

Los conflictos

Si echamos un vistazo general a los conflictos sociales verificados en las ciudades, y si lo organizamos en función de la relación existente entre la condición urbana o no urbana de los actores y el carácter local o nacional de los conflictos, tendremos la siguiente distribución.

Cuadro 1
Ecuador: la conflictividad urbana en el año 2000

	Total	Actores urbanos/ Conflictos locales	Actores urbanos/ Conflictos nacionales	Actores no urbanos/ Conflictos nacionales	Actores urbanos y no urbanos/ Conflictos nacionales	Actores no urbanos/ Conflictos no urbanos
Enero	5	1	1	1	2	0
Febrero	8	2	4	1	1	0
Marzo	5	0	4	1	0	0
Abril	10	2	7	0	1	0
Mayo	17	9	7	1	0	0
Junio	16	9	7	0	0	0
Julio	17	4	9	2	1	1
Agosto	9	6	2	0	1	0
Septiembre	6	0	2	1	3	0
Octubre	1	0	0	1	0	0
Noviembre	3	0	1	0	1	1
Diciembre	28	11	15	1	1	0
TOTAL	125	44	59	9	11	2
%	100	35,2	47,2	7,2	8,8	1,6

Fuente: Unda (2000).

Analicemos, pues, estos datos.

Actores urbanos (locales) en conflictos locales (urbanos)

Asumimos que son “actores urbanos” todos aquellos que tienen un basamento social, material, en las ciudades; los asumimos como “locales” en la medida en que el escenario de su acción coincide más o menos con el territorio de su existencia cotidiana; pueden, ciertamente, ser parte de actores más amplios y complejos (y participar en movilizaciones nacionales).

Entendemos por “conflictos urbanos” a todos aquellos enfrentamientos que ocurren en las ciudades y que movilizan a sujetos que se constituyen como tales dentro de esos espacios. Esto, siempre y cuando no estén vinculados de modo más o menos directo a algún conflicto nacional, aun cuando estén ligados al mismo eje. Por ejemplo: las protestas de los moradores de Carapungo alrededor de las tarifas del transporte público, eran, por la lógica del conflicto y por la confluencia temporal, parte de las luchas contra el incremento de los pasajes que se desató en todo el país, pero también se trataba de una particularidad que atendía a una situación local, circunscrita, si se lo considera como tarifa urbana o como tarifa interparroquial, con las consiguientes implicaciones sobre los precios.

En ese sentido, este apartado de actores urbanos envueltos en conflictos locales agrupa a un conjunto, en el fondo heterogéneo, de conflictividades que se parecen entre sí por tener una base territorial o sectorial localizada.

Por una parte, aquellos que tradicionalmente se catalogaban como “conflictos urbanos”: alrededor de los servicios urbanos básicos, educación, salud, transporte, de la vivienda (o de tierra para vivienda, más comúnmente entre nosotros); pero también alrededor del uso del territorio, en donde el espacio urbano aparece claramente como un recurso en disputa.

Ambos están relacionados con lo que podríamos denominar las “determinaciones socio-territoriales” de la constitución y existencia de los sujetos.

Por otra parte, acciones “sectoriales”, gremiales incluso, que no están vinculadas con la ciudad de la manera anterior, pero que tienen que ver con la calidad de vida de los actores urbanos en las ciudades (en eso, igual que el anterior grupo de conflictos): las luchas y protestas feministas, generacionales, laborales (igualmente, siempre y cuando no sean parte directa de un conflicto nacional). Están relacionadas con las “determinaciones sociales” de la constitución y existencia de los sujetos, es decir, con las determinaciones de clase, género, generación y (eventualmente) etnia.

Existen también aquellos que podríamos, tal vez, denominar “nuevos conflictos urbanos”. Nuevos por su reciente aparición: están ligados a los efectos producidos por las políticas neoliberales en la reconfiguración de la oferta de servicios, etc., después de las privatizaciones. Se trata, por lo pronto, de tres tipos de conflictos: una manifestación del conflicto entre capital y trabajo bajo la forma de enfrentamientos entre los empresarios de servicios privatizados y los consumidores (por ejemplo, las protestas de los usuarios de carreteras en Pichincha y Guayas); conflictos entre las empresas beneficiadas por políticas de privatización o terciarización y los gobiernos locales, en tanto los gobiernos locales asuman un cierto rol de control y regulación de los servicios prestados; pero también se producen choques entre el gobierno central (sus políticas y sus decisiones) y los gobiernos locales, en tanto estos gobiernos locales pretendan hacerse con la gestión de empresas o rubros que el gobierno central quiera privatizar (es el caso de los puertos de Esmeraldas y Puerto Bolívar, por ejemplo).

Si bien hasta ahora no son conflictos que tengan mucho peso cuantitativo, pueden ser una señal de los nuevos rumbos que podría comenzar a asumir la conflictividad urbana debido a que no se difuminan los conflictos en el mercado: se metamorfosean en una contradicción entre el capital y la población consumidora.

Estos tres tipos de conflictividad, de algún modo, remiten al antagonismo entre los grupos de poder y las clases subalternas.

Pero también deben considerarse los conflictos existentes al interior de los sectores dominantes. Las disputas de poder e influencia entre grupos locales, generalmente vinculadas con la captación de los gobiernos locales y que se incen-

tivan, lógicamente, con la cercanía de las elecciones. Y las acciones de grupos locales de poder por obtener un reparto más ventajoso de recursos nacionales; esto es, cuando dichos grupos son efectivamente “locales” en el sentido de que su base material, económica, sea de carácter más bien local o quizás regional. En esta puja utilizan el territorio como espacio de acumulación económica y política, buscando movilizar a las sociedades locales, o a parte de ellas, para sustentar con mejores posibilidades de éxito sus demandas.

En conjunto, como se ve en el cuadro que presentamos más atrás, representan un 35% de los conflictos urbanos relevados durante el año 2000. Significan, individualmente, el segundo grupo más numeroso.

La presencia de los actores urbanos en los conflictos nacionales

Consideramos como conflictos nacionales a aquellos que tensionan al conjunto de la sociedad en torno a orientaciones antagónicas del devenir común y que en consecuencia exigen definiciones, opciones y posicionamientos de los actores o, cuando menos, de los actores con más peso. Tratándose de conflictos nacionales, escapan al ámbito resolutorio de las instituciones locales y, por lo general, aun cuando estén ligados a aspectos inmediatos de la reproducción de las personas, van más allá de los conflictos locales tradicionales, es decir, más allá de aquellas cosas a cuya tematización como algo de incumbencia “local” ya están acostumbrados los actores.

Un tensionamiento general de la sociedad puede afectar de distintas maneras a los actores urbanos locales: muchos de ellos pueden quedar al margen de las acciones que se disputan, pues no rebasan el horizonte tradicional; otros, aun cuando generalmente no rebasen estos horizontes tradicionales, pueden ser parte de colectivos más amplios en construcción, lo que comúnmente salta a la vista en momentos de movilizaciones masivas. Otros por último, tienen lazos, incluso organizativos, con actores nacionales.

Se pueden distinguir dos lógicas en la conflictividad nacional observada durante el año 2000. Una de ellas traza la dinámica del antagonismo entre las clases subalternas y las clases dominantes; la otra marca el ritmo de los conflictos que se suscitan al interior de las clases dominantes.

El antagonismo entre las clases dominantes y las clases subalternas se ha desarrollado en torno a cuatro ejes centrales.

La aplicación del modelo neoliberal

Básicamente, y en este período, resultaron importantes las resistencias a las privatizaciones (en la medida en que ellas se convierten en elemento clave del mode-

lo para sus impulsores) y a los distintos intentos de imponer un marco legal que facilite la profundización del modelo neoliberal.

La pauperización y la precarización de las condiciones de vida

Muchos de los conflictos en este campo tienen que ver con las consecuencias materiales de la aplicación de ese modelo neoliberal para la cotidianidad de los sectores populares; de allí devienen demandas salariales y de estabilidad laboral, luchas contra la desatención estatal, sobre todo a las áreas sociales (en el período analizado, especialmente educación y salud), protestas contra el incremento de tarifas y precios, etc. En otros casos se trata de protestas contra determinadas confluencias de acciones gubernativas y del capital privado que se traducen en empobrecimiento inmediato (por ejemplo, las quiebras bancarias junto al congelamiento de los ahorros y a la inacción del gobierno para recuperar los dineros).

Los sentidos y el ejercicio de la democracia

Desde expresiones de la conciencia social contra la acentuación del autoritarismo hasta los afanes para revocar el mandato de un gobierno. La persistencia de este eje muestra que la democracia real, como instituciones y prácticas concretas, como proyecto, como discurso, como petición de principio, se encuentra en cuestión. No se trata de que estén a la vista inmediatamente las formas positivas de una democracia alternativa: se trata, más bien, de que las prácticas sociales busquen rebasar los marcos estrechos de una democracia controlada y restringida y, en esa búsqueda, van produciéndose esbozos de lo que pudiera ser una propuesta de otra democracia.

Por supuesto, estos conflictos sólo afloran en momentos de agudización extrema de las tensiones. Su presencia recurrente está relacionada con la visibilización de los nexos que unen al poder político (y a sus instituciones) con el poder económico, en momentos en que los resultados de esta identidad afectan de modo evidente la vida de las personas (congelamiento de los ahorros, pérdida del poder adquisitivo, desatención de las necesidades básicas de la población mientras al mismo tiempo se entregan ingentes recursos para los “salvatajes bancarios”, etc.).

La resistencia a las nuevas condiciones de la dependencia neocolonial

Posturas críticas y resistencias al ALCA, a la OMC, al involucramiento del país en el Plan Colombia, a la instalación de una base estadounidense en el puerto de Manta. Estamos viendo el inicio de las resistencias a la globalización neoliberal y a la nueva subordinación al imperio; pero, por de pronto, estos conflictos no movilizan a las amplias masas, sino a grupos de “voluntarios”.

Los conflictos entre sectores de las clases dominantes tienen, a su vez, dos ejes: el reparto de los recursos nacionales (muchas de las demandas de “autonomía provincial” tienen este carácter), y la hegemonía política sobre la sociedad en su conjunto, lo que aparece como conflictos entre los partidos políticos y sus figuras representativas, pero que se ventila igualmente como la incursión (constante) de los máximos dirigentes empresariales en la disputa política.

Finalmente, al interior de las clases y grupos subalternos se desarrolla también un conflicto por la hegemonía y la representación –puja centrada al interior del movimiento indígena, por tratarse del movimiento popular más consolidado, con mayor fuerza y con mayor presencia nacional. Una puja que, en el tiempo analizado, se dio entre la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la mayor organización indígena) por un lado y, por el otro, la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras) y la FEINE (Federación de Indígenas Evangélicos); estas últimas buscaban ser reconocidas como actores por el gobierno y tener mayor presencia en las instancias directivas de aparatos estatales dedicados al tratamiento de la problemática indígena. Más adelante, sin embargo, se avanzaron acercamientos entre todas las organizaciones indígenas y, a inicios del 2001, actuaron de conjunto en un amplio movimiento de protesta.

Los actores urbanos, que tienen menor peso, no jugaron un mayor papel en estos conflictos durante el año 2000, aun si se tiene en cuenta la presencia de la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales), que pretende la representación de los movimientos urbanos de cara a la opinión pública y al movimiento indígena. En cambio, durante el 2001 la CMS representará varios episodios de estas disputas. De todos modos, la debilidad y dispersión de los actores populares urbanos, y las propias limitaciones de la CMS, hacen que las acciones en ese sentido no trasciendan sobre las relaciones generales en la sociedad aunque afecten de modo claro las posibilidades de desenvolvimiento y afirmación del movimiento popular.

En todos estos casos de conflictos generales resulta evidente que los actores urbanos son “interpelados” no en relación con lo local sino con lo nacional, y en la medida en que lo nacional, lo general, afecta de modo sensible, perceptible, su existencia cotidiana. Esto indica, por supuesto, que los actores urbanos no pueden definirse solamente en relación con la sociedad local, sobre todo en momentos en que las orientaciones políticas y económicas nacionales empujan a la definición y al posicionamiento del conjunto de la sociedad ecuatoriana, más allá de sus anclajes territoriales. Los actores son impelidos a tomar parte en el conflicto pues entienden, de un modo o de otro, que en esos conflictos se encuentran en cuestión las condiciones mismas de su existencia como actores y, más allá de eso, los fundamentos materiales de su propia condición de sujetos.

Pero las respuestas a estas situaciones de conflicto nacional son diversas. En el caso de las clases subalternas, observamos tres comportamientos:

- respuestas estrictamente parciales, aisladas, donde la vinculación entre la contradicción particular de cada sujeto y el antagonismo general no sobrepasa el instante de la acción.
- respuestas parciales que no obstante expresan un esbozo de propuesta más amplia que podría tender a ir más allá de su propia inmediatez. Es decir, desde una resistencia parcial se encadena con la conflictividad nacional; pero si lo parcial es el horizonte determinante, entonces, al refluir la movilización social, se vuelven laxos los vínculos entre la existencia inmediata y las determinaciones generales, desfalleciendo la posibilidad de respuesta alternativa.
- desde una respuesta global, lo que igualmente puede tener al menos dos manifestaciones distintas: por una parte, si la resistencia es realizada exclusivamente desde la consideración general; por otra parte, si la respuesta logra articular las contradicciones particulares y los antagonismos generales.

Por su parte, las clases dominantes y los grupos de poder –cuando la base económica de dichos grupos es de corte nacional o más allá– direccionan sus acciones hacia la obtención de un reparto más ventajoso de recursos nacionales. Igual que los grupos de poder local, las clases dominantes nacionales utilizan el territorio como elemento discursivo para que les permita consolidar un espacio de acumulación económica y política. En ciertos casos puede tratarse de conflictos nacionales que son manipulados para aparecer bajo referencias ideológicas locales o regionales (por ejemplo, la marcha de los crespones negros de la oligarquía guayaquileña, que metamorfoseó la pugna por la captación de recursos estatales en la banca como si fuera la oposición entre sujetos-regiones, inexistentes en la realidad).

Es llamativo que un 47% de la totalidad de los conflictos relevados corresponda a esta categoría. Eso quiere decir que casi la mitad de la conflictividad que se presenta en las ciudades responde a ejes que rebasan la inmediatez del territorio en el que se expresan. Y significa también que los actores urbanos son llevados a posicionarse en los conflictos generales por la agudeza de dichas contradicciones y, por eso mismo, entran (si bien con debilidades) en una tendencia de constitución del movimiento popular (esto es, un sujeto complejo, más amplio, producto del encuentro y la articulación entre diversos movimientos populares).

La presencia de actores no urbanos en conflictos nacionales dentro de escenarios urbanos

Los conflictos nacionales, así como tensionan a los actores urbanos, tensionan también a los actores del campo. Pero la dinámica de involucramiento de los actores en los conflictos nacionales puede no quedarse encerrada en su horizonte territorial inmediato. De hecho, mientras más avanzan estos actores en su constitución como sujetos, más lo hacen en las intersecciones de los conflictos

particulares con los conflictos generales; es decir, tienden a convertirse en actores nacionales o a formar parte de procesos de conformación de actores nacionales (aquellos que despliegan acciones con repercusiones político-sociales de carácter nacional).

En este punto, como es fácil comprender, la acción colectiva ya no puede quedar circunscrita a “sus” escenarios de origen: debe necesariamente desbordarse, encontrar o construir nuevos escenarios de actuación, y aparecer, por tanto, en otros territorios. Dado que la lógica de los conflictos generales cuestiona de hecho los poderes establecidos, la acción de los actores nacionales tenderá a expresarse con fuerza en los territorios que han sido construidos socialmente como residencia del poder que es confrontado.

En la medida entonces que sectores campesinos –como el movimiento indígena, sobre todo, pero también los afiliados al Seguro Social Campesino– devienen en actores nacionales, y mientras lo sean, las ciudades pasan a ser también un territorio natural de su presencia y de sus acciones. Por eso las capitales provinciales y la capital de la república han sido recurrentemente “sitiadas” o “tomadas” por movilizaciones indígenas que no solamente resistían medidas gubernamentales que los afectaban de modo particular, sino que cuestionaban la legitimidad de las autoridades residentes en la ciudad.

Estos conflictos representan un 7% de todos los verificados en las ciudades ecuatorianas en el período de análisis. Son relativamente pocos, pero han tocado algunos de los temas más sensibles de los ejes de la conflictividad social de este momento: las privatizaciones y el carácter de la democracia.

La combinación de la actuación de actores campesino-indígenas en las ciudades con su presencia en aquellos temas nacionales que tensionan a la sociedad toda son una muestra clara del peso que, en la situación política nacional de hoy, han alcanzado los movimientos indios.

Confluencia de actores urbanos y no urbanos en conflictos nacionales dentro de escenarios urbanos

Los conflictos centrales, precisamente por serlo, reclaman posicionamientos y opciones de todos los actores o de aquellos que están en posibilidad de serlo. Esto implica tanto a actores nacionales como a actores locales, y tanto a actores urbanos como a actores rurales. Los actores del campo se manifiestan, al mismo tiempo, en dos dimensiones del conflicto: por un lado, a partir de los conflictos particulares que los determinan, siempre que esos conflictos estén atravesados por los ejes de conflictividad central de la sociedad; por otro lado, en el alcance de los conflictos generales, más allá de su específica particularidad.

Por su parte, los actores locales urbanos que participan en conflictos nacionales han seguido en este año tres comportamientos distintos: algunos tienen pre-

tensiones explícitas de constituirse como actores nacionales y buscan posicionarse en tal condición (por ejemplo, la Coordinadora de Movimientos Sociales); otros lo hacen en tanto las opciones que los constituyen son en sí mismas de carácter general más allá de lo espacial (por ejemplo, los grupos ecologistas, de derechos humanos, etc.); otros, en fin, participan desde el involucramiento puntual en un conflicto central, movidos por una demanda específica o por un sentimiento de exclusión constante pero difuso, que carece de formas de expresión organizadas y visibles.

Se producen entonces espacios específicos de encuentro entre actores diversos. Y eso ocurre en la medida en que todos ellos son determinados por conflictos nacionales y despliegan acciones alrededor de esos ejes. Así opera la lógica de la confluencia: actores distintos que son determinados (y afectados) por los mismos ejes de conflictividad tienden a confluír en las acciones sociales de resistencia.

Luego, la confluencia, para tener posibilidades de afirmarse y desarrollarse, para poder realizar sus potencialidades, debe ser construida como un acto de la conciencia y de la voluntad, debe ser constituida como el tránsito de la confluencia a la articulación social y política. Por eso es que, finalmente, ningún actor puede devenir como actor nacional en su exclusiva particularidad y sólo en relación con sus propias acciones; tarde o temprano deberá confluír con otros actores, de esos otros que son sus iguales.

La confluencia de actores campesinos y urbanos en las ciudades, enfrentando ambos los conflictos centrales de la sociedad, ha sido, en este tiempo, una relativa novedad en la acción social. Numéricamente son algo menos del 9% de los conflictos relevados; sin embargo, son los que han producido movilizaciones de mayores alcances, tanto por la cantidad de personas involucradas cuanto por el impacto que finalmente tuvieron (la rediscusión pública de ciertos temas ligados a la implementación del modelo neoliberal que los grupos dominantes quisieran clausurados al debate social, o la caída de un gobierno).

Actores no urbanos en escenarios urbanos con relación a conflictos que no tienen origen en las ciudades

Hay otro grupo de conflictos en los cuales la ciudad es propiamente el escenario donde se manifiestan los actores no urbanos para conseguir una mayor visibilización de su causa en los conflictos en que se ven envueltos. La ciudad, como centro de poderes políticos locales, regionales o nacionales, es un espacio que, si se actúa en él, permite “poner en consideración de la sociedad” protestas y propuestas que de otro modo no conseguirían salir de los espacios locales ni remontar un horizonte puramente localista, que es lo que suele ocurrir con mayor frecuencia.

Numéricamente escasos en la ciudad ecuatoriana (menos del 2%), muestran sin embargo una novedad: el hecho de que actores rurales locales estén pensando los territorios de su acción más allá del espacio inmediato en el que se producen los conflictos. Lo que a su vez puede estar evidenciando el impacto de los conflictos nacionales en el imaginario y en los comportamientos de los actores locales, también con relación a sus conflictos particulares.

¿Un nuevo rostro de la conflictividad urbana? (en cierto modo, las conclusiones)

Trataremos de acercarnos al rostro actual de la conflictividad urbana (¿el nuevo rostro de la conflictividad urbana?) a partir de cuatro elementos que se desprenden de la exposición anterior y que, de alguna manera, ya han sido tratados en esta exposición: primero, el tipo de conflictos; segundo, la relación con los antagonismos generales de la sociedad; tercero, la presencia de actores campesino-indígenas; y cuarto, el carácter de los sujetos que se conforman al calor de estos conflictos.

El tipo de conflictos

Los conflictos que se expresan en la ciudad tienen distinto carácter. De los que hemos revisado, se identifican por lo menos tres.

Por una parte, conflictos relacionados con la vida en la ciudad (en tanto la ciudad es un espacio local) y con el manejo (local) de esa realidad; “conflictos urbanos localizados”, podríamos decir.

Por otra parte, conflictos relacionados con ejes de confrontación generales a toda la sociedad, en los que los actores urbanos locales se ven involucrados, como otros actores; en ellos pueden confluir con actores de base mayoritariamente campesina que toman las ciudades como un espacio legítimo de sus acciones colectivas.

Finalmente, conflictos que no tienen que ver directamente (tal vez ni siquiera indirectamente) con las ciudades, con la vida urbana, con los actores sociales de base urbana; en estos casos, la ciudad es un espacio de manifestación y de amplificación de otras realidades; muestra cómo las otras realidades se van convirtiendo también en parte de la vida cotidiana de las ciudades por la vía de las acciones colectivas.

La conflictividad urbana y el eje de los antagonismos generales

Ya un primer vistazo al cuadro que presentamos más atrás nos muestra el peso que en la conflictividad urbana actual tienen los conflictos nacionales: en conjunto, suman un 63% del total. Pero no se trata solamente del número de conflic-

tos, sino de la variedad y amplitud de actores envueltos en ellos y del impacto sobre la vida social y política.

Tanto los actores locales urbanos como los actores urbanos que están en trance de convertirse en actores nacionales, cuanto los actores campesinos que se manifiestan en la ciudad, todos ellos (indígenas, trabajadores, estudiantes, maestros, mujeres, ambientalistas, cristianos) se han visto llevados a tomar opciones en torno a los ejes del antagonismo social de carácter general o nacional. La fuerza de estos conflictos ha sido tal que han marcado de modo tajante al conjunto del escenario nacional, lo cual implica que se profundice la polarización de la sociedad frente a opciones excluyentes del devenir nacional.

Estas opciones excluyentes se han presentado, en primer plano, respecto a la economía y a la política, claramente entrelazadas en este último período: el modelo de desarrollo (o, si se prefiere, la falta de desarrollo, la implementación del neoliberalismo); el carácter de las políticas nacionales (económicas o sociales); las consecuencias sociales de empobrecimiento que traen consigo dichas políticas; el contenido de la relación entre gobernantes y gobernados; el carácter de la democracia. Pero estos conflictos no pueden reducirse ya a las fronteras nacionales, y deben relacionarse con la redefinición de la dependencia, reconvertida en neocolonial: la subyugación de los gobiernos nacionales a los requerimientos del imperio.

A tal punto es la centralidad de estos ejes de conflicto, que incluso las temáticas más “tradicionales” o “locales” (servicios, por ejemplo) se ven atravesadas y reconstituidas por ellos (a lo que nos referíamos antes como la generación de “nuevos conflictos urbanos”, que expresan formas actuales de manifestación del antagonismo capital-trabajo).

De este modo, la saturación y la profundización de los conflictos nacionales modifica de modo radical la conflictividad urbana, haciendo pasar a un segundo plano a aquellos conflictos que tradicionalmente se reconocían como “urbanos”.

La ciudad y los actores campesino-indígenas

Otro elemento destacado de la actual conflictividad en las ciudades es la presencia de actores campesino-indígenas: ellos se expresan en un 18% de los conflictos. Como habíamos visto, esto suma tanto las acciones referidas a conflictos en las zonas rurales cuanto, sobre todo, su vinculación con los conflictos centrales de la sociedad.

Al parecer, en momentos de agudización de los conflictos y de las tensiones generales, actores “locales” y “particulares” tienden a entrar en procesos de transformación en actores nacionales. En consecuencia, sus acciones desbordan el territorio inmediato, “normal”, en que habían estado confinadas, y lo desbordan hacia aquellos espacios en que se dirimen –por lo menos al nivel de los imaginarios sociales– los conflictos (las capitales provinciales, la capital del país).

Este movimiento “atrae” a las ciudades otras movilizaciones de actores campesinos en torno a temáticas, esas sí, localizadas.

Ahora, cuando la ciudad se convierte en escenario de la acción de actores y sujetos no urbanos, se vuelve más factible el acercamiento espiritual entre los actores originarios de la ciudad y aquellos otros que toman la ciudad como un escenario de sus acciones: la cercanía física acerca también las inquietudes y las propuestas, y pueden producirse acercamientos de sus respectivas esperanzas; pueden, en fin, reconocerse con mayor claridad las afinidades, es decir, el sufrimiento de condiciones similares, el sometimiento a un opresor común. Se vuelve así concreta la posibilidad de constitución de actores complejos, la unidad de los movimientos y movilizaciones de los pobres de la ciudad y los pobres del campo.

El carácter de los sujetos que se conforman

Finalmente quisiéramos referirnos al carácter de los actores populares que se van constituyendo en estos conflictos según el predominio de ciertas características preponderantes.

Algunos actores se constituyen, sobre todo, en torno a conflictos locales, con acciones localizadas, con horizontes limitados a sus espacios inmediatos de actuación; sus demandas, por lo tanto, son parciales y localizadas y difícilmente producen espacios de encuentro con otros actores, ni siquiera de su misma clase.

Estos actores, por lo general, no suelen rebasar los marcos establecidos de conducta social (aun cuando puedan, eventualmente, hacer uso de métodos de apariencia “radicales”); sus propuestas, limitadas a la inmediatez de la reivindicación, suelen desplegar pocos alcances de contestación o de creatividad social, pues se desenvuelven por lo general dentro de lo permitido o lo inducido.

Muchas de las demandas barriales o laborales caben en este grupo. No obstante, hay que anotar que algunos de ellos se vinculan a acciones colectivas generales, tensionados por los ejes centrales de conflictividad. Pero no lo hacen desde su inmediata definición como actores particulares, sino como parte de las movilizaciones populares amplias: no alcanzan (aún) a constituirse en sujetos desde su específica particularidad, sino desde su reconocimiento de aquello que los acerca a otros sectores subalternos movilizadas, cuya constitución en sujetos está en ese momento más avanzada.

En un segundo grupo podríamos ubicar a actores que se constituyen con una referencia que es casi inmediatamente “nacional” o “general” (aún cuando se actúe localizadamente). Ciertas protestas o contestaciones contra la OMC y el ALCA, contra la corrupción, en relación con el medio ambiente, etc., pueden caber en este grupo si es que sus discursos se quedan en un plano de generalidad ideológica, sin enlazar de modo visible con las necesidades y aspiraciones inmediatas de la vida cotidiana de las mayorías. En ese caso, sus movilizaciones son

siempre acciones de grupos pequeños, “pioneros” o “voluntarios”, de las que las amplias masas son, por de pronto, espectadoras. No obstante, generalmente buscan producir encuentros, acaso articulaciones, con otros actores; y esto es verdad para las demandas específicas que los caracterizan, pero también para impulsar su presencia en los conflictos generales que tensionan al conjunto de la sociedad.

En un tercer grupo se ubican aquellos actores que se constituyen haciéndose cargo del juego de dobles referencialidades que caracteriza a cualquier sujeto: lo local y lo nacional, lo particular y lo general, la economía y la política. Ellos, ciertamente, despliegan acciones relacionadas con demandas particulares, pero alcanzan a rebasar este nivel y a descubrir vínculos entre esas situaciones y las condiciones generales que afectan a todos; es decir, alcanzan a vislumbrar los lazos que unen los conflictos particulares y los conflictos centrales. Por otra parte, el acceso a la doble referencialidad que los constituye les facilita dar alcances alternativos, creadores, a sus acciones colectivas; sus protestas no se quedan en el rechazo sino que buscan imaginar salidas a la situación planteada, al conflicto identificado. Entonces sus acciones buscan, así sea de modo incompleto, ciertos niveles de acercamiento, de encuentro, de articulaciones, con otros sujetos.

Por ahora, sin embargo, actores de estas características vienen desde afuera de las ciudades: se trata del movimiento indígena que –en parte por eso– se convierte en punto de referencia, en invitación a la creatividad y a la autonomía para los actores urbanos, que en estos momentos se presentan más bien dispersos y aislados.

Bibliografía

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2000[a] *Algunas consideraciones metodológicas para la elaboración de una cronología sobre el conflicto social en la región* (Buenos Aires: CLACSO) Mimeo.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2000[b] *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) Año I, N° 1, Junio.

Unda, Mario (org.) (2000) *Ecuador 2000: Cronología de los conflictos sociales*, en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) Año I, N° 1, Junio.